WEBINAR:

Repercusiones de los precios de mercado en la soberanía alimentaria de productores y consumidores

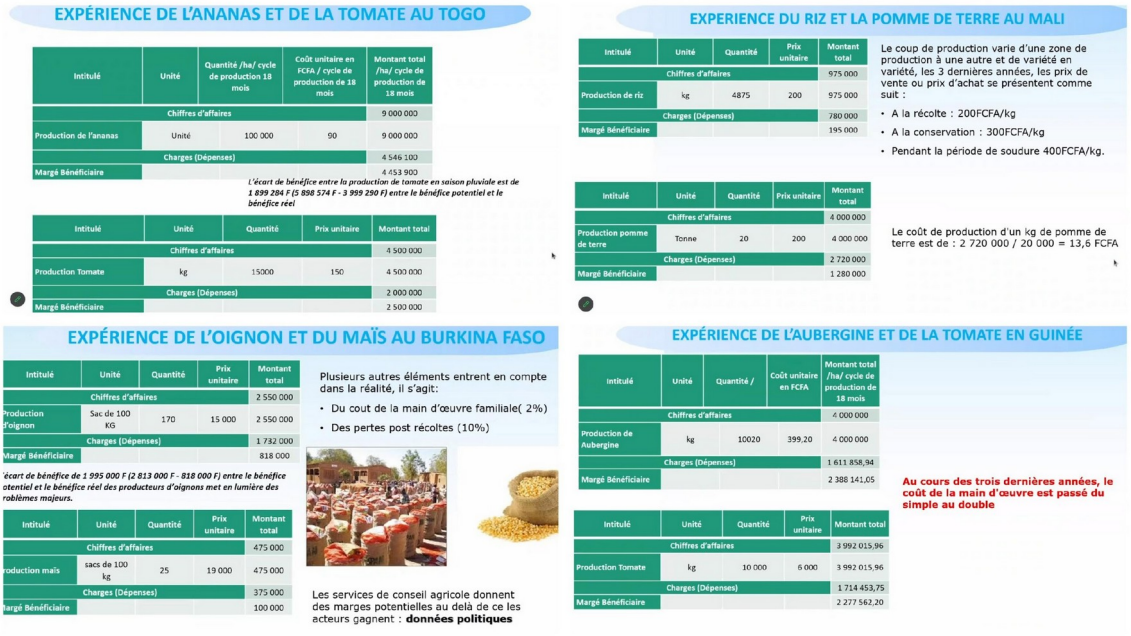
30 de mayo de 2025 | Síntesis

El Grupo de Trabajo sobre Comercio, Mercados e Ingresos del Comité Internacional de Planificación (CIP) *celebró el 30 de mayo un seminario en línea en el que se analizó el impacto de los precios de mercado en la soberanía alimentaria de productores y consumidores. Moderado por Ibrahima Coulibaly -Presidente de ROPPA, la red de organizaciones de agricultores y productores de África Occidental- y Morgan Ody, Coordinador General del movimiento campesino mundial La Vía Campesina, el seminario web, de dos horas de duración, reunió a casi 60 participantes de Asia, Oceanía, África, Europa y América.*

Entre los aspectos más destacados cabe citar una amplia gama de testimonios procedentes de distintos sectores. He aquí una síntesis:

"El 50% de los pequeños productores de África Occidental ni siquiera alcanza el umbral de rentabilidad"

Dieudonné, de la ROPPA, señaló que, a pesar de producir el 70% de los alimentos, los propios pequeños productores se enfrentan a una inseguridad alimentaria y una malnutrición crónicas. Destacó esta paradoja con ejemplos de agricultores de Togo, Malí, Burkina Faso y Guinea que cultivan piña, tomate, arroz, patata, cebolla, maíz y berenjena. Los márgenes que obtienen son extremadamente escasos, a menudo apenas suficientes para cubrir los costes básicos de producción, sin tener en cuenta el trabajo no remunerado de los miembros de la familia ni las frecuentes pérdidas debidas a la variabilidad climática y los ataques de plagas.



En los últimos años, los costes laborales se han duplicado, reduciendo aún más estos escasos márgenes y amenazando la sostenibilidad de la agricultura a pequeña escala. Dieudonné argumenta que no se trata simplemente de malas temporadas o mala suerte, sino de un problema estructural: los precios de mercado de estos cultivos alimentarios esenciales son sistemáticamente demasiado bajos y no tienen en cuenta los costes reales y crecientes de la producción.

Por ejemplo, los servicios de asesoramiento agrícola se basan a menudo en datos obsoletos o poco realistas, ignorando toda la magnitud de los retos a los que se enfrentan los productores. El resultado es que, incluso en los años buenos, los agricultores sólo alcanzan el punto de equilibrio en el mejor de los casos, mientras que en los años malos pueden acabar endeudados o verse obligados a abandonar por completo la agricultura. "Sólo 1 de cada 2 productores alcanza el equilibrio".

Incluso después de meses de intenso trabajo, los pequeños productores sólo pueden ganar entre 20.000 y 25.000 francos CFA al mes -lo que equivale a apenas 43 dólares estadounidenses, por debajo del salario mínimo- y las mujeres, en particular, se enfrentan a obstáculos aún mayores para acceder a los recursos y los mercados. Los productores no pueden permitirse mantener sus existencias a la espera de precios favorables porque tienen que devolver sus préstamos, así que venden a cualquier precio que se les ofrezca. Mientras tanto, los comerciantes de la cadena de valor se llevan la mayor parte de los beneficios, a pesar de los esfuerzos de los productores. Los productores se enfrentan a riesgos inducidos por el cambio climático, pero sin ningún seguro.

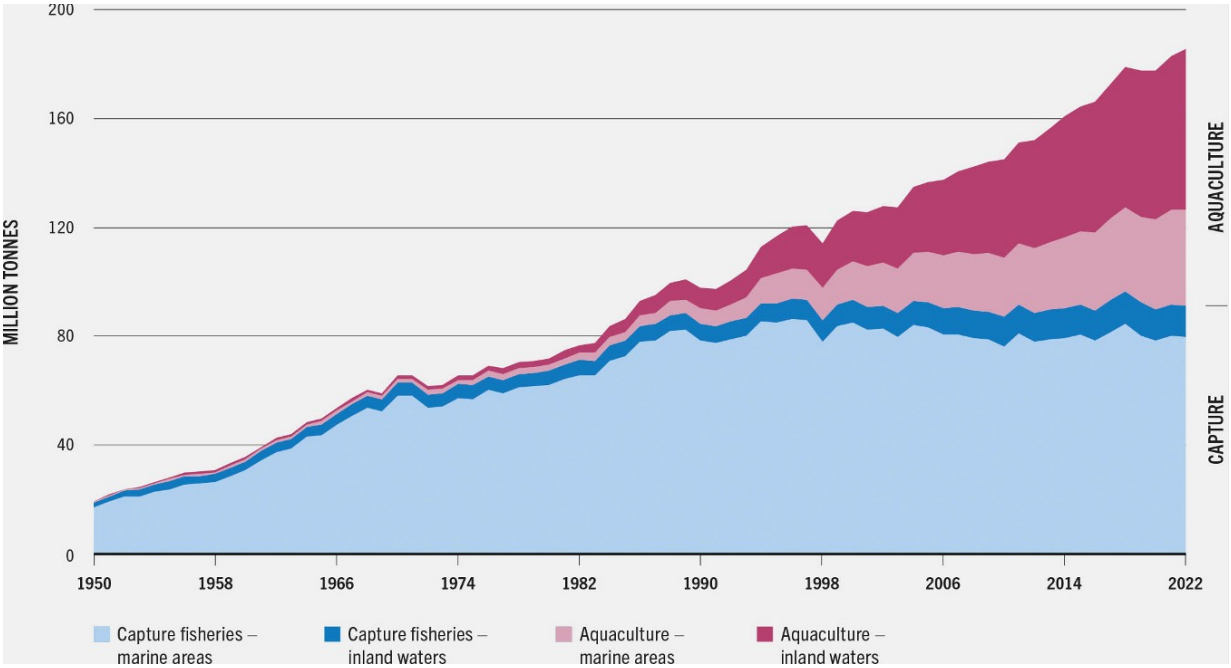
Para hacer frente a esta crisis, las organizaciones campesinas africanas proponen medidas como la promoción de modelos de agricultura agroecológica, la mejora de la gestión del agua, el apoyo a los agricultores para que accedan a mejores equipos, sistemas de seguros, la institucionalización de la fijación de precios justos y el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores. El fomento de la contratación pública y los sistemas de crédito inventariables también se consideran medidas esenciales para garantizar unos medios de vida dignos a estos productores de alimentos esenciales.

"La gobernanza de la pesca debe estar dirigida por el Comité de Pesca (COFI) de la FAO, guiado por las Directrices para la Pesca en Pequeña Escala, y no por organismos comerciales como la OMC"

Herman Kumara, del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), explicó los retos a los que se enfrentan las comunidades de pescadores ante el crecimiento de la acuicultura y la agenda de la "economía azul" y el "crecimiento azul". Explicó que la pesca de captura -aunque emite menos gases de efecto invernadero- está siendo eclipsada por proyectos de acuicultura a gran escala promovidos como "alimentos azules" o "transformación azul". Estas iniciativas, apoyadas por la FAO, el Foro Económico Mundial, la OMC y varias agencias de la ONU, pretenden ser sostenibles pero sirven sobre todo a intereses corporativos impulsados por la exportación, excluyendo a los pescadores artesanales de la toma de decisiones y del acceso a los recursos.

La acuicultura supera ya a la pesca de captura y representa el 51% de la producción mundial de animales acuáticos. El auge de los "alimentos azules" y las proteínas producidas en laboratorio,

impulsado por poderosos actores, está transformando los sistemas alimentarios y mermando el papel de los pescadores tradicionales.



Las subvenciones y los esfuerzos de conservación tienden a favorecer las operaciones a escala industrial, mientras que los pescadores artesanales luchan por sobrevivir. Los gobiernos no reconocen las relaciones de los pescadores artesanales con sus aguas/zonas de pesca tradicionales. Iniciativas como la Blue Food Partnership y la Aquatic/Blue Food Coalition participan en debates políticos que marginan sistemáticamente a los pequeños pescadores a pesar de sus pretensiones de inclusión.

Kumara advirtió contra la reducción de la pesca a mera mercancía en las negociaciones comerciales, que la despoja de su importancia sociocultural y nutricional. Defendió que la gobernanza de la pesca debe estar dirigida por el Comité de Pesca de la FAO (COFI), y no por organismos comerciales como la OMC, que priorizan los beneficios y el acceso al mercado sobre la justicia social y la sostenibilidad ecológica. También condenó la criminalización de los pescadores artesanales, a los que se culpa erróneamente de pesca ilegal, mientras que las flotas industriales son las principales infractoras. Kumara insistió en que las Directrices Voluntarias para Asegurar la Pesca Sostenible a Pequeña Escala (Directrices PPE) deben guiar la gobernanza pesquera. La conservación debe respetar la justicia, la equidad y los conocimientos tradicionales, en lugar de desposeer a las comunidades.

"El poder se concentra en los grandes minoristas y procesadores, lo que limita las opciones del consumidor y la calidad, y explota a los productores".

Sarah Woolley, representante del sindicato británico de trabajadores de la panadería, subrayó las graves tensiones que sufre el sistema alimentario británico. Como consecuencia del aumento de los costes mundiales de los productos básicos y de los elevados precios de los alimentos, ni los

consumidores ni los productores perciben beneficios reales. Muchas familias tienen dificultades para acceder a comidas asequibles y nutritivas, mientras que los productores y los trabajadores soportan presiones económicas.

Woolley señaló una paradoja: aquellos que son esenciales para el sistema alimentario -agricultores, trabajadores y pequeños productores- se ven presionados a medida que los beneficios del mercado no se ajustan a los crecientes costes. El poder se concentra en los grandes minoristas y procesadores, lo que limita las opciones del consumidor y la calidad, y explota a los productores. Los trabajadores migrantes a menudo ganan el salario mínimo por jornadas largas y físicamente exigentes, en condiciones inseguras, con viviendas precarias y poca capacidad de denuncia.

"La comida barata depende de la mano de obra barata, que conlleva importantes costes humanos".

También argumentó que el simple aumento de los precios de los alimentos no es una solución, ya que millones de personas ya se enfrentan a la inseguridad alimentaria. En su lugar, el sistema necesita una revisión fundamental para crear cadenas de valor transparentes y equitativas que den prioridad a la justicia y la sostenibilidad. Esto incluye el apoyo a la contratación pública, políticas de comercio justo, contratos seguros, salarios dignos, condiciones de trabajo seguras y representación sindical. La visión de la soberanía alimentaria -que se traduce en el control de los pueblos sobre el sistema alimentario, los beneficios y la toma de decisiones- puede hacer frente a crisis recientes como la COVID-19 y el Brexit, que han puesto de manifiesto la dependencia del Reino Unido de cadenas de suministro mundiales frágiles y la precariedad de los trabajadores. Hizo hincapié en la creación de redes alimentarias regionales resilientes, cadenas de suministro más cortas y cooperativas basadas en la equidad, lo que significa dignidad en la fijación de precios, derechos laborales y acceso familiar a alimentos saludables, un nuevo sistema alimentario basado en la justicia, la sostenibilidad y la salud para todos.

"Las mujeres de la planta de producción de tomates secos en Egipto ganan sólo tres dólares al día"

Hala Barakat, de MENA (HIC), analizó el control de la producción de frutas y hortalizas en Egipto, utilizando como ejemplo clave los tomates secados al sol. Egipto exporta anualmente tomates secos por valor de más de 100 millones de dólares. Este modelo de exportación suele ser elogiado por su volumen, el valor añadido que aporta mediante la transformación y la participación de las mujeres en la producción.

Sin embargo, la experiencia en un centro de producción del sur de Egipto reveló una realidad muy distinta. Grandes extensiones de tierra se dedican al secado de tomates, y las mujeres -en su mayoría con buena formación- constituyen la mano de obra principal. Estas mujeres trabajan en turnos largos pero sólo ganan unos tres dólares al día. Tras el secado, los tomates se almacenan y se preparan para la exportación, principalmente a Brasil e Italia.

Barakat subrayó que este sistema viola el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Los tomates se compran a pequeños agricultores mediante agricultura por contrato, a menudo

presionándoles para que renuncien a sus tierras, lo que desplaza tierras de la producción local de alimentos, una forma de acaparamiento de tierras. Mientras tanto, los tomates secos exportados se venden en los supermercados extranjeros a unas 15 libras el kilo, casi 50 veces más que el precio pagado a los agricultores. (verifique los hechos, por favor)

Este modelo dista mucho de ser un éxito. Por el contrario, contribuye a la inseguridad alimentaria en Egipto al hacer que las hortalizas sean inasequibles para los consumidores locales. Situaciones similares se dan en el caso de las alcachofas, las cebollas y las patatas. La explotación de la mano de obra y de la tierra, combinada con unos precios injustos, pone de manifiesto las profundas desigualdades del sistema alimentario y amenaza la soberanía alimentaria del país.

"Políticas como los precios mínimos, la gestión de la oferta y las reservas públicas de alimentos estabilizan los ingresos de los agricultores"

Patti Naylor (Family Farm Defenders USA, La Vía Campesina) subrayó que la coerción para aceptar productos agrícolas estadounidenses no es nueva, sino que ahora se promueve activamente bajo la actual administración. El imperialismo estadounidense y el neoliberalismo han configurado durante mucho tiempo las políticas agrícolas mundiales, despojando a muchos países de su soberanía alimentaria y beneficiando principalmente a la agroindustria estadounidense en lugar de apoyar la justicia alimentaria.

La soberanía alimentaria consiste fundamentalmente en proteger el futuro de la humanidad defendiendo los derechos de las comunidades y su capacidad para producir sus propios alimentos, salvaguardando al mismo tiempo el medio ambiente. Un aspecto clave son los productos básicos almacenables, es decir, los cultivos que se producen en grandes extensiones de tierra en Estados Unidos y que pueden almacenarse y utilizarse durante todo el año, ofreciendo a los agricultores estabilidad en sus ingresos. Cuando se gestionan de forma responsable, estos cultivos benefician a los agricultores y a la sociedad. Sin embargo, la industrialización y la globalización sin regulación conducen a la explotación de la mano de obra, el medio ambiente y los agricultores, que se enfrentan a precios impredecibles y falsas soluciones climáticas como los mercados de carbono que no abordan los problemas de fondo.

Naylor señaló la grave tensión mental y física que sufren los agricultores constreñidos por la desregulación y las presiones del mercado capitalista. La desregulación convierte los alimentos en mercancías especulativas, favorece los biocombustibles frente a la producción de alimentos y externaliza a la sociedad costes medioambientales como la degradación del suelo y la contaminación. Recordó cómo, durante el New Deal de la RDA, políticas como los precios mínimos, la gestión de la oferta y las reservas públicas de alimentos estabilizaron los ingresos de los agricultores, apoyaron los objetivos ecológicos y plasmaron los principios de soberanía alimentaria al limitar el dumping de las importaciones baratas. Hoy, los agricultores de todo el mundo exigen precios justos y reformas. La gestión de la oferta y las reservas de alimentos siguen siendo esenciales para la estabilidad del mercado y la justa compensación de los agricultores. Naylor también insistió en la necesidad de políticas públicas que reflejen los verdaderos costes de los alimentos, como la sostenibilidad, la justicia laboral y el bienestar de las comunidades.

COMENTARIOS:

En los debates abiertos que siguieron al seminario web, los asistentes destacaron cuestiones críticas en torno a la soberanía alimentaria, el género, la fijación de precios y la contratación pública en diversas regiones.

Suoad, en nombre de **Túnez**, subrayó que los precios de los alimentos en el país están desconectados de los costes reales de producción debido a los mecanismos especulativos dominados por las grandes corporaciones. Las mujeres rurales se llevan la peor parte de esta realidad, enfrentándose a la exclusión de mercados bien remunerados, salarios bajos y condiciones de trabajo inestables, todo ello agravado por la dependencia de las importaciones de alimentos vinculadas a acuerdos de libre comercio. Suoad reclamó políticas públicas que aseguren precios estables a través de programas de adquisición, garanticen el acceso de las mujeres a la herencia y la financiación, regulen los precios de los alimentos básicos, protejan los mercados locales y promuevan el diálogo político inclusivo. También subrayó que la soberanía alimentaria no puede separarse de la justicia social y los derechos de la mujer, incluida la urgente necesidad de abordar crisis como el genocidio de **Gaza**. Tampoco puede alcanzarse la soberanía alimentaria sin cortar por lo sano con el neoliberalismo.

Varios participantes plantearon la cuestión de que la producción de alimentos se desvía cada vez más hacia **los biocombustibles**. Se señaló que muchos agricultores norteamericanos se sienten atraídos por las políticas de biocombustibles, creyendo que impulsan los precios de los cultivos. Sin embargo, este cambio ha afianzado los monocultivos industriales, como el maíz en Iowa, al tiempo que ha desalentado las verdaderas reformas políticas. Los biocombustibles contribuyen poco a la sostenibilidad medioambiental y, junto con las subvenciones públicas, enmascaran la diferencia entre los precios de mercado y los costes reales de producción. Junto con la elevada deuda agrícola, este sistema ejerce una inmensa presión sobre los agricultores.

Los ejemplos de **Indonesia** ilustran que la **contratación pública**, a través de las reservas reguladoras del gobierno, puede ayudar a estabilizar los precios, aunque la fijación de precios justos sigue siendo un reto. **En Malí**, como señaló Ibrahim Sidibé, de La Vía Campesina y CNOP Malí, la contratación pública puede atrapar a los agricultores si no se diseña con cuidado, ya que los Estados suelen pagar precios inferiores a los del mercado e imponer procedimientos onerosos. Esto obliga a los agricultores a explorar la venta directa como alternativa.

En **Uruguay**, los pequeños agricultores han puesto en marcha iniciativas de comercialización directa e intercambio de alimentos en sus comunidades. Marcelo Fossatti abogó por un nuevo marco comercial mundial que desmercantilice los alimentos y apoye el intercambio equitativo entre países y comunidades.

En **Camerún**, los productores carecen en gran medida de apoyo y necesitan plataformas digitales para acceder mejor a los mercados. Desde Mali se planteó el reto de abandonar los modelos de

alimentos baratos, junto con un llamamiento a empoderar a los consumidores como "consumidores-actores" que pueden impulsar el cambio a través del diálogo y la acción colectiva.

Los moderadores del webinario, al concluir la sesión, hicieron un llamamiento en favor de políticas públicas fuertes y de una ruptura decisiva con la lógica del libre mercado en la agricultura. Ibrahim Coulibaly, de la ROPPA, subrayó que este tipo de seminarios web ofrecen una plataforma para compartir experiencias de primera mano de pequeños productores, explorar diferentes políticas públicas aplicadas en varios países y estudiar diversos enfoques para crear acceso al mercado para los pequeños productores de alimentos.

Morgan Ody, de La Vía Campesina, se hizo eco de estos sentimientos y anunció un seminario web de seguimiento para explorar marcos alternativos para el comercio internacional que den prioridad a la cooperación, la autonomía, la soberanía alimentaria y la solidaridad.

Las fechas de esta próxima sesión se comunicarán próximamente.

El seminario web contó con el apoyo de Terra Nuova y Focus on the Global South, que prestan un apoyo técnico crucial a este Grupo de Trabajo de la CIF sobre Comercio, Mercados e Ingresos.